

## Venezuela. Adiós a las excusas

**Andrés Cañizález**

**Andrés Cañizález:** periodista venezolano; corresponsal de la Agencia Alemana de Prensa (DPA), en Caracas; cursante de la Maestría de Ciencia Política en la Universidad Simón Bolívar.

El año 1996 puede considerarse verdaderamente decisivo para el gobierno que adelanta el presidente Rafael Caldera. Tras cumplir en febrero último los dos primeros años de una gestión de cinco, para el veterano líder socialcristiano, de ochenta años de edad, se acabó de manera definitiva el tiempo de las excusas. Este lapso intermedio de su mandato será en definitiva el que le dará un sello especial a su gestión, caracterizada en la primera etapa por la falta de definiciones en materia económica, por una muy particular política de alianzas políticas y por el alejamiento respecto de la figura del cambio a la que apostaron los votantes en diciembre de 1993, cuando al elegir a Caldera produjeron la más importante resurrección política que se recuerde en este país sudamericano.

### **Un discurso que no fue**

Caldera resultó electo en diciembre de 1993. El discurso de su campaña electoral tuvo dos ejes fundamentales: rechazo a la aplicación de un programa de ajustes macroeconómicos, en sintonía con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y la propuesta de un gobierno «supra-partido» que respondiera a los intereses de la nación y no a los de los partidos políticos; marcando especialmente distancia de su otrora feudo, el socialcristiano Copei, y del socialdemócrata Acción Democrática (AD).

Si bien Caldera, quien ya ocupó la jefatura de Estado en el período 1969-74, oficializó su séptima candidatura sólo a mediados de 1993, era por ello evidente con anterioridad su intención de lanzarse nuevamente al ruedo electoral, tras haber sido «pasado a la reserva» por la nueva generación de dirigentes de Copei, organización que fundara hace medio siglo. Ese gesto, esa intención, en un Caldera poco dado a hablar públicamente en los últimos años, tuvo como escenario el Parlamento el 4 de febrero de 1992, poco después del intento de un grupo de militares con discurso nacionalista de derrocar al entonces mandatario, Carlos Andrés Pérez.

En 1992, en su condición de «padre de la democracia» local, Caldera fustigó la pobreza, el programa de ajustes que aplicaba Pérez y a la dirigencia de los dos partidos tradicionales: Copei y AD. Al gobierno de entonces le criticó la falta de

sensibilidad hacia las necesidades de la población y el buscar únicamente las metas macroeconómicas, mientras que a los partidos les señaló la falta de participación popular en la toma de decisiones y su incapacidad de escuchar el «clamor popular». A partir de entonces comenzó configurarse su opción presidencial, una verdadera resurrección para el último de los primeros líderes democráticos de este siglo en Venezuela, la cual le valió hasta el ser «excluido» de Copei, al negarse a participar del proceso interno para escoger al candidato e insistir en la «candidatura supra-partido», de consenso nacional.

Electo con cerca del 30% de los votos en unos comicios donde el 40% de los votantes prefirió quedarse en casa, Caldera durante los dos primeros años de su mandato contradujo en buena medida lo que los electores leyeron de su campaña electoral. En materia económica, la incoherencia se evidenció de manera dramática en la existencia de ocho planes distintos, cada uno bautizado con el apellido de algún ministro, pero sin que ninguno significara la adopción de políticas claras y de un rumbo definido. No se concretó el anunciado «programa heterodoxo» que Caldera proponía en el arranque presidencial, que iba a tomar en cuenta a los pobres y no sólo a las cifras macroeconómicas; y finalmente, ante la incapacidad oficial de articular una propuesta de política económica, se recurrió en octubre de 1995 al otrora demonizado Fondo Monetario Internacional (FMI) para que «ponga orden en casa», como había prometido el presidente en 1994.

En el terreno político, no pocos identificaron a Caldera con un cambio profundo del sistema. Figuras del propio Ejecutivo hasta sugirieron públicamente un «Calderazo» que habría implicado, al igual que en el Perú de Fujimori, la disolución de los poderes legislativo y judicial y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Nada de eso pasó. Caldera, constitucionalista de formación, optó por la vía de la negociación, y a veces de la coerción (con la amenaza velada de disolución del Parlamento –el gobierno se encuentra en minoría parlamentaria–) para lograr, por ejemplo, en el primer año de su gobierno poderes extraordinarios, gracias entre otros factores al decisivo respaldo de AD.

Si bien el «Calderazo» no pasó de ser una ilusión presente a lo largo del primer año de gestión, tampoco resultó ser muy real aquella apuesta a una administración que estuviera por encima de los intereses partidistas, a los que tanto Caldera atacó a lo largo de su campaña. En primer lugar, su triunfo electoral le debe mucho a la «maquinaria» (pequeña, pero maquinaria partidista al fin) del Movimiento al Socialismo (MAS) y a la conformación de una nueva fuerza partidista, Convergencia Nacional, que resultó de la escisión de Copei, cuando el «padre fundador» fuera excluido al calor de la campaña electoral. Los compromisos políticos derivados de esta situación, así como los propios rencores –casi que filiales del viejo líder– producidos por la separación partidaria, han ayudado de manera sistemática para que esta administración no obtenga las adhesiones necesarias ni plasme el diálogo indispensable para convertirse en el «gobierno de unidad nacional» declamado y prometido con insistencia en sus inicios. Tal vez la mejor definición del Ejecutivo venezolano la dio el obispo católico Roberto Lucker, al catalogarlo de «autista».

Convergencia Nacional resultó ser un partido político similar a los ya existentes en el país, realizando las más inusitadas alianzas electorales (se vinculó paralelamente al MAS, a AD y a Copei) en los comicios regionales y municipales de diciembre de 1995, con el fin único de acceder a posiciones de poder en gobernaciones, asambleas legislativas, alcaldías, concejos municipales. Sin una propuesta ideológica clara, con una línea de acción política sujeta completamente a la gestión gubernamental, representa uno de los grandes fracasos de la propuesta de Caldera, quien ha terminado rodeado de su círculo familiar ante la incapacidad de cohesionar de forma efectiva un gobierno supra-partido, de real consenso nacional, como lo ameritaba la coyuntura venezolana tras el inestable último año y medio de Pérez (febrero 1992-mayo 1993) y la transición que encabezó Ramón J. Velásquez, una vez que aquél fue separado de la presidencia. El entorno familiar se conformó por ejemplo con su hijo Andrés, quien ocupara durante dos años el muy cercano Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, y la presencia de dos yernos, uno al frente de Casa Militar (equipo de seguridad presidencial) —el general Rubén Rojas—, y otro ministro de Energía y Minas —Erwin Arrieta— al tiempo que otro vástago, Juan José, comanda el partido Convergencia.

### **El año verdadero**

No es que los anteriores hayan sido irreales. Se produjeron situaciones totalmente concretas y verificables: control cambiario; inflación de 70,8% y de 56,6% (años 94 y 95, respectivamente); derrota oficial en comicios regionales y repunte de AD; «crack» bancario; suspensión y posterior restitución de garantías constitucionales; etc. Mientras tanto, la pobreza toca ahora a más del 60% de la población venezolana (según Fundacredesa, *en El Nacional*, 14/3/96).

Al principio mencionábamos a 1996 como el año que pondrá un sello particular al segundo gobierno de Caldera. Durante los 24 primeros meses de gestión fue constante la excusa de que tal medida o situación estaba directamente relacionada con administraciones anteriores. De alguna manera, la población adoptó esa tesitura y el primer año fue de «luna de miel», con importantes índices de popularidad, concesión de poderes extraordinarios por el Parlamento y absoluto respeto a la figura del patriarcal jefe de Estado.

Con el transcurrir de los siguientes 12 meses esas luces fueron perdiendo fuerza hasta iluminar prolijamente una situación extrema, donde sectores políticos y económicos fueron unánimes al exigir un acuerdo con el FMI, o en todo caso la definición de un rumbo en materia económica. El empresariado privado, agrupado en Fedecámaras, y la jerarquía de la iglesia católica, coincidían en catalogar a 1996 como un año de creciente conflictividad social. Dicha perspectiva tuvo comprobación real durante el primer trimestre de 1996, con la vuelta de las protestas estudiantiles en Caracas y las principales ciudades del país, lo que unido a continuas manifestaciones de empleados públicos y maestros (estos últimos incluso con una prolongada huelga de alrededor de dos meses), dio precisamente un panorama poco halagador en el plano social. En especial al inicio del camino

fondomonetarista (inevitable según expresan ahora figuras oficiales) y las expectativas de mejores condiciones económicas para la población media y baja quedan pospuestas, si acaso, para 1997 de lograrse los objetivos iniciales del ajuste, que apuntan a la reducción del abultado déficit fiscal, entre un 6% y 7% del PIB (cifra divulgada por Carlos Hernández Delfino, director del Banco Central de Venezuela).

En 1996 Caldera y su tren ejecutivo no tienen más excusas, lo que resulte o lo que deje de hacerse en este período es de su absoluta responsabilidad, pues la propia aplicación de un programa de ajustes, junto al FMI, obedeció a la falta de coherencia que durante dos años signó la gestión oficial, llegando incluso a la incapacidad de señalar tales errores. Así lo evidenció el propio mandatario en su segundo mensaje anual al Parlamento, el 12 de marzo, cuando reconoció las presiones para acercarse finalmente al FMI sin admitir la responsabilidad de sus más de dos años de gestión (o de desgobierno, como se le llama) en los desequilibrios macroeconómicos existentes.

De ese discurso presidencial es digno de mencionar, por su tono «autista», la referencia al tema salarial. Caldera defendió un decreto, que el Parlamento se negó a convertir en ley, rechazado por Fedecámaras –al no estar resuelta aún la reforma del sistema de prestaciones sociales–, y repudiado también por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), principal central obrera del país, que lo consideró insuficiente. Ante ese abanico de señalamientos, el presidente respondió: «He tomado la decisión de elevar el ingreso de los trabajadores peor remunerados y no me importa las críticas que me hagan por ello». Debe recordarse que con anterioridad el gobierno, a través del ministro del Trabajo y el mismo jefe de estado, convocó en enero de 1996 un diálogo con empresarios y sindicatos para reformar el sistema de seguridad social de los trabajadores, a la par de incrementos salariales, como parte de una negociación y acuerdo nacional sobre la materia, sin que tres meses después se tuviera resultado alguno.

### **Y en el fondo, el Fondo**

Exactamente 26 meses tardó el presidente Caldera en asumir y reconocer, siempre de manera tácita, la imposibilidad de su gobierno de dirigir una política económica, de encontrar un rumbo para la economía, sin la guía del FMI, denostado a lo largo de la campaña electoral de 1993, cuando el actual jefe de Estado dio a conocer su «Carta de Intención con el pueblo de Venezuela», con el fin de distanciarse del acuerdo con el Fondo que firmara Pérez en 1989, que implicó la aplicación de un severo programa de ajustes macroeconómicos.

Una encuesta de la empresa Gallup, realizada poco después del mensaje presidencial del 15 de abril de 1996, en el que Caldera dio a conocer las medidas –el «trago amargo del FMI», como le habían llamado–, mostró que los consultados no encontraban ninguna diferencia sustancial e entre el plan de ajuste de Pérez y

el de Caldera, salvo la distancia de siete años, de difícil tránsito para el país (en *El Nacional*, 18/4/96).

De nuevo sin reconocer su directa responsabilidad en la coyuntura, que hizo decir al ministro de Planificación, el mítico líder guerrillero de los 60 y actual dirigente del MAS, Teodoro Petkoff, que se aplicaba la receta del FMI o el país sería arrasado por la crisis, el presidente Caldera se presentó ante el país, esta vez menos emotivo, ese 15 de abril para dar inicio formalmente al programa de ajustes cuya señal de partida fue un alza promedio de la gasolina del 500%, liberación de las tasas bancarias de interés (alcanzando el 70%), desmontaje del control cambiario vigente desde junio de 1994, que significó una devaluación del bolívar del aproximadamente el 60% en su primer día de operaciones libres, y como colofón la negativa oficial a suscribir durante 1996 nuevos convenios laborales colectivos con el casi millón de empleados públicos y con los maestros.

Aunque ningún ministro ha querido asumir públicamente que una segunda fase del plan de ajuste comprenderá la reducción sustancial de la burocracia estatal (en un país donde el desempleo abierto y la informalidad alcanza al 60% de la población en capacidad de trabajar), es evidente que el conjunto de medidas significan un remezón, que aun anunciado será muy duro de digerir para una población acostumbrada a vivir en medio de los subsidios que regó la riqueza petrolera de las últimas décadas. Sondeos de opinión muestran diferentes niveles de rechazo a salidas de fuerza frente a la senda fondo monetarista, pero a la par expresan incertidumbre ante un período que se visualiza como violento y cargado de conflictos laborales.

Con excepción del partido obrerista La Causa Radical (CR), las principales fuerzas políticas representadas en el Parlamento habían reclamado al Ejecutivo tomar las «recetas del Fondo», y cuando comienza efectivamente el tránsito por el ajuste, se predice que el respaldo legislativo a Caldera estará condicionado a la aplicación del programa, elogiado en la sede del FMI y recibido con un «no nos queda otra salida» por el propio presidente y la población encuestada. Para Caldera, cuyo discurso subraya la necesidad de combatir la pobreza, en los próximos años constituirá un reto absoluto revertir (a la par de la aplicación del plan del FMI) el marcado empobrecimiento de la población venezolana, que según la empresa Datos debe dedicar el 72% de sus ingresos sólo a la alimentación, mientras que 16 años atrás a dicho rubro se destinaba únicamente el 29% de sus ingresos (en revista Sic, 4/1996).

### **Pensar en 1998**

«Los que piensan en el 98 tienen que contribuir a que salgamos adelante en el 96», advirtió un Caldera no precisamente inocente, al mundo político venezolano al cumplirse dos años de su gestión. Esa sola mención ha puesto en el tapete con bastante antelación el tema de las superelecciones de 1998, cuando por primera vez y en un solo acto de votación los venezolanos deban elegir presidente,

parlamento nacional, legislaturas regionales, gobernaciones, alcaldías y concejos municipales.

La mención de Caldera, en un discurso cuya minuciosa preparación según fuentes gubernamentales le impidió asistir a la Cumbre Andina de Trujillo (Perú), evidencia lo que podría ser el objetivo central de la administración para lo que resta del período: entregar la banda presidencial a quien resulte electo en diciembre de 1998. Ese «salgamos adelante en el 96» es el nuevo lema para seguir sobrellevando, como ha sido la práctica, la gestión gubernamental; pero nuevamente se lanza una frase carente de contenido de mayor contenido, de una propuesta específica que sirva de sostén para levantar algún modelo de diálogo, de entendimiento.

Caldera dirigió la advertencia hacia el Parlamento, donde en la actualidad está representado el conjunto de fuerzas políticas con excepción del líder golpista del 4 de febrero de 1992, el comandante retirado Hugo Chávez, quien se ha negado a participar de la vida electoral. De las adhesiones que Caldera pueda reunir, una vez más por la vía de la coerción tácita, depende en gran medida el sostenimiento de su gobierno, venido a menos en las encuestas, con el respaldo condicionado del MAS y la situación minoritaria de su propio partido como lo demostraron los comicios regionales de diciembre último.

Este objetivo de llegar al 98, y el llamado a constituirlo en meta colectiva para el conjunto de la dirigencia política, echan por tierra las esperanzas —aún vigentes— de que Caldera impulsaría, en lo que resta de su mandato, una profunda reforma en Venezuela, expresada tal vez en una nueva Constitución, producto de una Asamblea Constituyente. Definitivamente, el presidente dio lo que tenía para aportar (según él mismo, la «pacificación política» del país tras el tormentoso último período de Pérez) y no puede esperarse ninguna novedad importante en lo que resta de gestión, entre cuyos signos principales, en 1996 resalta la reiterada incapacidad oficial de protagonizar un proceso dialogado que pudiera conducir al necesario consenso para un proyecto nacional cuya base debería estar más allá de los partidos tradicionales. Respecto a éstos no se debe desechar su aún vigente, aunque menguado, arraigo popular y estables estructuras organizativas de carácter nacional, que en no pocas ocasiones fraguaron fraudes.

Caldera ofrecía la opción del cambio, o tal vez así quisieron verlo quienes lo eligieron en diciembre de 1993. Si a su condición «autista» se añade la senda del ajuste fondomonetarista y la posibilidad de incremento en los conflictos sociales, las otrora luces positivas de la administración derivarán en cortocircuito.

El mensaje a «quienes piensan en el 98» fue escuchado atentamente por los que apuestan a ese momento. Desde meses atrás la ex-Miss Universo (1981) y actual alcaldesa del municipio capitalino de Chacao, Irene Sáez, aparece al frente de los sondeos de opinión como figura más confiable y con preferencias importantes para lanzarse al ruedo presidencial. El hecho de que un grupo significativo de electores pueda inclinarse hacia Sáez, quien por cierto no ha manifestado

intenciones electorales, ni tampoco se ha expresado sobre problemas nacionales, colocó de nuevo en el debate el tema de la credibilidad que despiertan los partidos tradicionales y las amplias posibilidades de llegar al punto final de desgaste del actual sistema electoral, sin que ello pueda significar necesariamente el nacimiento de una opción coherente y renovadora que modifique el cuadro político local y permita transformaciones sociales en favor de las mayorías.

Para llegar a ese 98, recordó el presidente, hará falta convencer al 60% (70% en Caracas) que no votó en los comicios regionales y municipales de diciembre de 1995. Esa tarea implica para partidos como AD y Copei (ejes del modelo bipartidista que primó por décadas) revertir estados de opinión contrarios a sus anteriores gestiones, así como el desgaste del clientelismo funcional del sistema político venezolano: deben llegar al poder sin ofrecer lo que no podrán dar, pues de ganar se encontrarán con un Estado quebrado.

Son prematuros los pronósticos para 1998, pero de hecho las maquinarias partidistas evidencian pugnas y rivalidades internas en este 1996, que constituyen signos de la configuración del futuro cuadro electoral. Como se mencionó, Irene Sáez cuenta con ventaja (especialmente por estar a cargo del municipio más rico del país). Podrán aparecer otras figuras «extra-partidos», como el comandante retirado Francisco Arias Cárdenas, cabecilla también del intento golpista de febrero de 1992 y actual gobernador del estratégico estado Zulia (con el respaldo de la CR); el propio Hugo Chávez, quien ha aglutinado como civil al Movimiento Bolivariano Revolucionario (MBR-200), agrupación patrocinante de la misma intentona golpista. Dentro de AD y Copei, la pugna electoral ya está servida, con la reaparición de sus dos candidatos de 1993: Claudio Fermín (AD) y Oswaldo Alvarez Paz (Copei). Ambos coincidentemente están distanciados de las respectivas cúpulas partidarias.

En ese 1998, que ya la dirigencia política venezolana dibuja como próximo, tal vez pueda configurarse el choque entre las tradicionales fuerzas políticas, que son las que ahora aparecen también con posibilidades (por la propia existencia de sus maquinarias), con las figuras venidas de otras esferas, o la eventual incorporación de estos nuevos protagonistas a las antiguas estructuras con el fin de copar posiciones de poder. En todo caso, ese panorama sólo se conocerá una vez que se hayan despejado las dudas de este 96.

*Caracas, mayo de 1996*